



Ana **NATALUCCI***

*: Dra. en Ciencias Sociales. Investigadora Independiente del CONICET con sede en el CITRA (CONICET/UMET). Directora del Observatorio de Protesta Social (CITRA/CONICET). Desde 2018 se desempeña como profesora Adjunta de la materia "Teorías de la Acción Colectiva", Carrera de Ciencia Política, UBA. e-mail: anatalucci@gmail.com

Gabriela **LLAMOSAS***

*: Dra. en Antropología. Investigadora adscripta del Observatorio de la Protesta Social (CITRA/CONICET). Becaria doctoral del proyecto UBACyT "Las articulaciones prácticas de distintos niveles de organización político-administrativa: relaciones sociales y procesos políticos" (FFyL/UBA). e-mail: gabrielallamosas2@yahoo.com

PRESENTADO: 13.12.22

ACEPTADO: 15.02.23

DEBATES ACTUALES SOBRE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LOS SINDICATOS Y LA POLÍTICA.

25

Resumen

En este artículo nos proponemos reflexionar acerca de los desafíos que las organizaciones sociales y sindicales tienen en la actualidad. Para ello, revisitamos algunas discusiones actuales en el campo de la acción colectiva para pensar el vínculo entre el Estado y los actores colectivos, atendiendo al modo en que se renueva a la luz de las transformaciones estructurales acontecidas durante los últimos años. Concretamente, nos preguntamos acerca de los procesos de organización popular a partir de los dilemas planteados para las organizaciones sociales y sindicales con el retorno de un gobierno peronista al poder y a partir de la irrupción de la pandemia en 2020.

Palabras Clave: Organización popular; Heteronomía; Desigualdad; Democracia.

Summary

In this paper we propose to reflect on the challenges that social and union organizations currently have. With this purpose, we revisit some current discussions in the field of collective action to think about the link between the State and collective actors, considering the way in which it is renewed in light of the structural transformations that have occurred in recent years. Specifically, we wonder about the processes of popular organization based on the dilemmas posed for social and union organizations with the return of a Peronist government to power and after the outbreak of the pandemic in 2020.

Key words: Popular organization; Heteronomy; Inequality; Democracy.

INTRODUCCIÓN

A partir de la crisis global de 2008/2009, y con mayor énfasis en los últimos años, se discute sobre una relación compleja entre la desigualdad y la democracia. La pregunta es: ¿cuánta desigualdad puede tolerar la democracia? ¿Cómo pueden coexistir la democracia y el capitalismo en su fase neoliberal? Si la relación entre liberalismo político y liberalismo económico ya era compleja (De Lasagnerie, 2012), eso se complejizó más con el neoliberalismo en tanto éste supone el desdibujamiento de la frontera entre sociedad civil y sociedad política, con la lógica del mercado invadiéndolo todo, incluso el Estado. Siguiendo a De Lagasnerie (2012), el neoliberalismo implica la expansión de la lógica mercantil a todos los ámbitos de la vida político-económica, desdibujando la diferencia entre las racionalidades económica y política. Indudablemente esta mutación ha reordenado las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil que ha dejado de pensarse como una red asociativa de sujetos de derechos, para hacerlo en términos de una trama molecular de empresas en competencia (Pérez, 2011).

En este contexto se produjo una resignificación del derecho a la asistencia; en otras palabras, en el modelo estatal bienestarista toda persona por el hecho de ser ciudadano tenía derecho a ser asistido, en cambio, en el neoliberal la persona se encuentra en deuda por lo que debe prestar una contraprestación (Castel, et. al., 2013). Así, entre los 80 y los 90 la universalidad de los derechos cedió paso a programas focalizados y enlatados de beneficiarios. Estos cambios han sido decisivos para la intervención del Estado en los sucesivos gobiernos a través de las políticas sociales y laborales. Claro que no todos han tenido el mismo perfil, ni la misma impronta (Natalucci, 2018a). De hecho, a la frase del retiro del Estado durante los 90, le siguió durante los 2000 la idea del regreso del Estado y recientemente el fuerte cuestionamiento de su desempeño por parte de la coalición Cambiemos/Juntos.

Al respecto, Vilas ha advertido que esa metáfora sobre las idas y venidas del Estado no ha permitido ver que “los cambios en los objetivos y estilos de acción estatal responden siempre a cambios en las relaciones de poder entre actores sociales

y la eficacia de las fuerzas políticas que las expresan” (2011, 11). Y podemos agregar que tampoco permiten pensar en las cuestiones estructurales que moldean los vínculos entre los Estados, las políticas sectoriales (sociales y laborales) y los ciudadanos, que exceden las voluntades políticas. Hay una tensión intrínseca al neoliberalismo, que no consiste en tener un Estado “chico”, sino que con una lógica mercantilista borra cualquier atisbo de razón social.

Ahora bien, a aquella pregunta por la desigualdad y la democracia hay que incorporar una dimensión cara para la política argentina: los procesos de organización popular. El desempeño y actuación de las organizaciones sociales y sindicales han sido clave para no sólo resistir los embates de las fuerzas pro-neoliberales sino también para instalar nuevos debates, formas de intervenir y de actuar colectivamente. Dicho rápidamente: si en los 90 en el campo de la sociología se pensó en términos de descolectivización, de despoltización (Svampa, 2005; Pérez, 2010), los 2000 demostraron que se habían producido fuertes mutaciones en las formas de acción colectiva y de organización popular. Desde las organizaciones piqueteras y su rol en la gestión de los planes sociales (Svampa y Pereyra, 2003) han emergido nuevas formas de politización, consolidadas durante kirchnerismo, que han transformado las concepciones que las organizaciones tenían sobre la participación y la representación política como sobre el Estado (Natalucci y Pérez, 2012). Al respecto, es insoslayable la creciente participación de las organizaciones sociales en la participación en ámbitos estatales, en el congreso y en la gestión de la política social (Gradin, 2015; 2017; Longa, 2019; Natalucci, 2015; 2018a).

Claro que esta cuestión ha estado atravesada por una tensión que es constitutiva del campo multiorganizacional en Argentina: la heteronomía, entendida como la intervención para la creación de nuevos dispositivos que puedan ratificar, instaurar o redefinir derechos y, al mismo tiempo, apuntalar experiencias plurales que rearticulen las diferencias, sin subsumirlas en una unidad totalizadora. En definitiva, este tipo de estrategia permite vislumbrar un nuevo modo de institución. Asimismo, es posibilitada por la doble representación de lo sectorial y la política, entre la construcción de

poder corporativo y poder político. Esta tensión se agudiza en gobiernos de afinidad política-ideológica, en la que el nivel de participación estatal es mayor.

Con este marco, el objetivo de este artículo es dilucidar algunos desafíos que las organizaciones sociales y sindicales tienen en la actualidad. Para esto, informadas empíricamente, nos proponemos visitar algunas discusiones clásicas para pensar el vínculo entre Estado y actores colectivos, atendiendo al modo en que se renuevan a la luz de las transformaciones estructurales descritas sucintamente. Nos detendremos en algunos procesos y coyunturas específicas. El lector no encontrará un relato histórico sistemático, sino una construcción narrativa que recupere los nodos y puntos de inflexión de este debate.

ESTADO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

En el campo de estudios de la acción colectiva y los movimientos sociales, las perspectivas hegemónicas, aún con sus diferencias, comparten algunos supuestos para explicar la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Por su parte, el llamado paradigma identitario surgió en los 70 en el marco de la transición de la sociedad moderna a la posmoderna, en plena emergencia del neoliberalismo. Relacionadas con la transformación de los soportes de integración social provistos por la sociedad salarial, aquel propuso descentrarse de la clase como *explanans* privilegiado y focalizarse en la construcción de las identidades de nuevos sujetos colectivos que exigían el tratamiento de problemas hasta entonces considerados subalternos al conflicto fundamental entre capital y trabajo, como los de género, sexuales, culturales, étnicos, pacifistas, etc.

Para autores, como Alain Tournaie (2006), los movimientos sociales tenían la potencialidad de la historicidad, el nuevo sujeto que tenía la posibilidad de cambiar la historia venidera. En sintonía con este planteo, Alberto Melucci o Jean Cohen reivindicaron como la principal virtud de los movimientos sociales la posibilidad de desplegar en el ámbito de la sociedad civil la democratización de estructuras de la vida cotidiana. Esta estrategia fue denominada “radicalismo autolimitante” (Cohen, 1985, 8) en alusión a la capacidad de los

movimientos de generar espacios públicos democráticos para la transformación de identidades como un fin en sí mismo antes que un instrumento para la toma del poder. En esta perspectiva, los movimientos se inscriben en luchas para la extensión de la ciudadanía en el campo de la sociedad civil (Melucci, 1994a). Así, cualquier intento de intervenir en el Estado podía implicar la cooptación o pérdida de transformación de su potencial. Para Melucci (1994b), la construcción de la identidad suponía explorar dimensiones que no pudieran ser restringidas a la racionalidad instrumental. Finalmente, los movimientos eran pensados como el actor colectivo de los procesos de movilización que venían a renovar las formas de acción generales y, en tal sentido, se diferenciaban de los sindicatos asociados a luchas de tipo corporativa por la apropiación de recursos.

Para el paradigma estratégico -incluyendo la teoría de movilización de recursos y de procesos políticos- la relación entre el movimiento social y las actuaciones institucionales es de continuidad. Desde esta perspectiva, la clave más que el Estado es el gobierno. Un movimiento social en tanto “conjunto de opiniones y creencias de la población que representa preferencias para cambiar algunos elementos de la estructura social y/o la distribución de las recompensas en una sociedad” (McCarthy y Zald, 1977, 1217-1218), decide sus estrategias sobre la racionalidad instrumental o estratégica, basadas en intereses compartidos y en la posibilidad de contar con los recursos necesarios. De acuerdo con esta lógica, los movimientos sociales son *outsiders* o *challengers* que entablan disputas con el *establishment* en un contexto determinado de oportunidades políticas (Goldstone, 2004).

Incluso, en una publicación más reciente, McAdam, Tarrow y Tilly (2005) han intentado ampliar un poco el marco conceptual operando un desplazamiento a perspectivas menos arraigadas en el componente intencional de la acción colectiva. De ahí que haya un corrimiento de la noción de organización hacia la de contienda política, diferenciada entre aquella contenciosa y no contenciosa. De esta manera, mantienen la diferencia entre la política institucionalizada, la no institucionalizada y la consideración de los movimientos

como *outsiders*. Los sindicatos, en el mismo sentido que la perspectiva identitaria, son concebidos como actores corporativos que forman parte del sistema político establecido.

En ambas perspectivas, se observa que la política está materializada en instituciones y principalmente en el Estado, por lo que queda restringida al sistema político de representación de intereses, con una división taxativa entre el Estado y la sociedad civil, entre lo político y lo social (Tapia, 2009; Natalucci y Pagliarone, 2013). Como hemos señalado en otras publicaciones, esta perspectiva encuentra sus fundamentos socio-políticos en la obra de Robert Dahl (1989), en el sentido de una concepción minimalista en la que la política constituye la posibilidad de acceso a -e influencia sobre- instituciones existentes en el marco de la poliarquía antes que como una práctica social con capacidad de transformación de esos propios marcos (Pérez y Natalucci, 2008).

Luis Tapia (2009) ha realizado un aporte central al sortear esa división taxativa y proponer la idea que los movimientos sociales y sus organizaciones transitan entre ambos campos, el político y el social, de acuerdo a sus estrategias y los desafíos que se le presenten. De fondo, Tapia cuestiona la división óptica entre lo social y lo político para reconocer el carácter profundamente transformador que pueden tener las organizaciones sociales, pero también las sindicales. Esto es clave dado que al disolver esa diferencia no hay actores *outsiders*, sino agentes colectivos que participan del juego político. El supuesto socio-político de esta perspectiva radica en reponer una visión maximalista de la política, esto es, la capacidad de aquellos para instaurar nuevas pautas de acción, la posibilidad de producir y reproducir espacios sociales y, en consecuencia, convertirse en un espacio de experimentación y ampliación democrática.

LA METÁFORA DEL PUENTE Y LA DOBLE REPRESENTACIÓN

Es común que las organizaciones sociales y sindicales se refieran a la idea de puente; también las de derecha como ha señalado Gabriel Vommaro (2017). Respecto de esto último, los dirigentes de centro-derecha y de derecha reunidos

en Propuesta Republicana (PRO) utilizan esa metáfora, aunque no compartan la concepción respecto del Estado; para ellos también el ingreso a la política implica un salto desde un espacio sectorial, solo que en este caso “la construcción del puente se establece entre el mundo político y el de los negocios” (Vommaro, 2017, 13). Podríamos decir que la metáfora del puente es constitutiva de la cultura política nacional. Veamos las especificidades para las organizaciones de la tradición nacional y popular.

En su caso, estas se auto perciben como “mediadores entre el Estado y los sectores populares” (Natalucci, 2012, 31), en esa mediación se explica la concepción respecto de la representación política en su doble sentido: del Estado hacia los sectores populares y de estos hacia el Estado. Como supuesto, el Estado es concebido como un espacio clave para transformar el orden social en tanto aquel posibilita la instauración de derechos. Por ello, este tipo de representación implica la conquista de reivindicaciones sectoriales como la actuación del sujeto político. Esta referencia es consistente con la propuesta de Tapia de pensar que las organizaciones transitan esos espacios, que pueden actuar sectorialmente, incluso defender intereses corporativos y, al mismo tiempo, jugar políticamente, incluso en términos de política electoral-partidaria.

En trabajos previos, definimos que este modo de entender la representación es constitutiva de las formas de hacer política en Argentina, específicamente de la gramática movimentista de acción colectiva (Natalucci, 2015, 2018b). Aquella se constituyó a mediados de los 40 a partir de la incorporación de los sectores populares a la comunidad política, articulando la representación corporativa-sectorial con el lenguaje de derechos propio de la lógica política. Las organizaciones que despliegan esta gramática tienen una concepción circular de la historia que alterna entre momentos de resistencia, que se caracterizan por el retroceso económico y la fragmentación política para los sectores populares y otros de ofensiva, en los que es posible recuperar derechos, acceder al Estado y de crecimiento de la articulación organizacional. Con este contexto, y en términos generales, la movilización es una estrategia de cuestionamiento social en los momentos defen-

sivos, y plebiscitaria y de apoyo a los gobiernos afines en los momentos ofensivos. En términos de la construcción política, la estrategia de las organizaciones es la participación de un movimiento nacional -un frente electoral- que impulse un proyecto policlasista, en el que tengan la posibilidad de oficiar de puentes entre los sectores populares y el Estado. Dado que ese movimiento nacional suele integrarse también por una élite externa, hay una serie de tensiones intrínsecas vinculadas a la representación de esos sectores. Así se genera un juego entre la integración estatal y el desafío plebeyo que “contiene en su seno una doble dimensión: conflicto y orden” (Rinesi y Vommaro, 2007, 460).

Hasta acá comentamos la definición teórica de la gramática movimientista, que ha sido altamente productiva para explicar la estrategia de las organizaciones no sólo en los 40 a partir de la irrupción del peronismo como sujeto político, sino también en relación con las decisiones que tomaron muchas organizaciones luego de la crisis de 2001 de incorporarse al kirchnerismo.

LA COMPLEJA RECREACIÓN DE LA GRÁMATICA MOVIMIENTISTA EN UN ESTADO EN TRANSICIÓN

Las primeras explicaciones respecto de la incorporación de muchas organizaciones al kirchnerismo se concentraron en la cooptación como clave explicativa. Autores como Borón (2007) o Campione y Rajland (2006) señalaron que Néstor Kirchner había habilitado una estrategia estatal de contención de la protesta, que ponía en evidencia o bien la debilidad de los sectores populares o bien la “infinita” capacidad de “volver al orden” por parte del Partido Justicialista (Svampa, 2005). Así, las organizaciones habían sido cooptadas en el sentido de ver domesticado su poder disruptivo para facilitar su incorporación al aparato del Estado y a la obtención de recursos.

Como respuesta a esta explicación, otros autores resaltaron la complejidad de los vínculos entre gobierno, organizaciones, procesos identitarios y de estrategias (Natalucci, 2012; 2015), las tensiones intrínsecas de las relaciones entre régimen político y movilización social y los procesos de institu-

cionalización que se derivan de ellas (Masseti y Gómez, 2009). De modos diferentes, estas perspectivas venían a reponer el carácter agencial de las organizaciones y a inscribir su incorporación en el kirchnerismo en una larga tradición política.

Ahora bien, el kirchnerismo como ciclo gubernamental -antes que como movimiento político- (Sidicaro, 2001) atravesó diferentes etapas y, como mencionamos en la Introducción, la crisis de 2008/2009 interrumpió el proceso de crecimiento económico, de mejoramiento de las condiciones de vida y de la distribución de la riqueza sostenido hasta ese momento. En aquel entonces, como durante la pandemia, surgió la pregunta: ¿quién pagaría la crisis? La crítica situación económica y social que sucedió luego implicó cambios en el campo multiorganizacional y en la relación entre las organizaciones sectoriales y la elite partidaria.

Avatares sindicales

En términos generales, el movimiento sindical atravesó un proceso de sucesivas fragmentaciones entre 2008 y 2012. En 2010, la ruptura de la CTA en dos fracciones (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y en 2012 con la ruptura de la CGT Azopardo en dos sectores, además de la ya constituida CGT Azul y Blanca en 2008.

La discusión de la CTA a partir de 2003 estuvo relacionada en principio con revisar la estrategia del sindicalismo de movimiento social, que le había valido una gravitación creciente durante la etapa neoliberal. Además, esta fue acompañada por la premisa de la autonomía respecto de los patrones, pero también del Estado y los partidos políticos en un intento de construcción de un movimiento político, social y cultural propio (Gurrera, 2008; Armelino, 2012).

La irrupción del kirchnerismo implicó todo un sismo para la CTA: la falta de acuerdo respecto del pedido de Kirchner de reunificarse con la CGT -en vez del otorgamiento de la reclamada personería gremial- e integrarse a la coalición de gobierno (Pérez y Natalucci, 2012) aparejó una diáspora que a su vez llevó a diferentes posicionamientos y estrategias individuales de sus máximos dirigentes (Armelino, 2012). Esto se combinó con un cambio de escenario fundamental respecto de la revitali-

zación sindical que aconteció apenas asumido el propio gobierno y que implicó el fortalecimiento de la estrategia corporativa de los sindicatos frente a la de movilización territorial. A su vez, esto generó un progresivo distanciamiento entre los sindicatos más fuertes de la Central como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) -aún con sus diferencias- de las organizaciones territoriales, como la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

Para el Congreso de 2008 se perfilaron dos líneas de acción política bien diferentes: la Paritaria Social (PS), y la Constituyente Social (CS). Siguiendo a Morris (2020), la primera era impulsada por la CTERA y la secretaría general encabezada por Hugo Yasky en pos de construir una alianza policlásista con el objetivo de participar del articulado institucional y estatal; la segunda era motorizada por Víctor de Gennaro y ATE Nacional -que luego también se fraccionaría- y buscaba reponer la construcción del movimiento político, social y cultural, una construcción política-partidaria por fuera del Estado y sobre todo del kirchnerismo. Ambas posiciones terminaron siendo irreconciliables, por lo que conformaron la CTA de los Trabajadores, cercana al kirchnerismo, y la CTA Autónoma. Es necesario mencionar que esta ruptura no solamente responde al cálculo estratégico de sus dirigentes sino también a las bases y a la construcción identitaria que la Central hizo durante los 90 luego de su partición de la CGT en 1996.

El proceso interno de CGT fue diferente, dado que los gremios que integran la Central comparten varias premisas claves: la intervención en política partidaria, participación en instancias estatales y adhesión al peronismo. Esto implicó que poco después que asumió Kirchner se iniciara el proceso de unificación (Natalucci, 2017), primero con una conducción tripartita y luego con la elección de Hugo Moyano como secretario general por el período 2004-2008. En 2008, la crisis internacional de 2008/2009 y la pregunta de quién pagaría los costos de la crisis implicó que el conflicto entre el capital y el trabajo se desplazara del eje externo al interno (Wainer, 2016). Si bien se produjeron varias discusiones, nos interesa remarcar dos. La primera relacionada con los costos de la crisis y ciertos intentos de los sectores cegetistas

de avanzar en la regulación del llamado trabajo en negro, desmontar los mecanismos de la tercerización que precarizan los empleos e insistir en la distribución de la riqueza. Esto supuso que se generara un debate -e incluso proyectos legislativos- sobre la participación en las ganancias de las empresas y el cobro del impuesto a los salarios más altos. Esto implicó un límite respecto de esas condiciones estructurales que mencionamos en la Introducción, de lo que el neoliberalismo ha excluido siquiera como posibilidad.

La segunda discusión se vinculó con la tensión entre las organizaciones y la elite política: ¿quién tiene la representación de esos sectores? ¿Las organizaciones a partir de su representación corporativa o la elite por su desempeño en el gobierno? En este punto, las discusiones cegetistas a partir de 2009 reflejan algunos de estos dilemas. Por ejemplo, cuando en 2009 el núcleo MTA conformó la Corriente Nacional de Sindicalismo Peronista (CNSP) que articulaba a distintas organizaciones sindicales con la aspiración de participar en política partidaria. Específicamente, más allá del reposicionamiento de las organizaciones sindicales en la escena pública, éstas aspiraron a recuperar protagonismo político a través de la participación electoral en el frente de gobierno. Así, la demanda “salto a la política” resumía las intenciones de disputar la representación política de esos sectores, por mayor participación política. Esta jugó un rol muy importante a la hora de configurar el mapa sindical previo a 2015; de hecho, las diferencias entre la elite kirchnerista y los dilemas sindicales finalmente impidieron la consolidación de la CNSP y posibilitaron la ruptura de la CGT en 2012.

Avatares territoriales

El proceso de las organizaciones piqueteras, de base territorial o social fue diferente al de las sindicales. En principio, porque venían de un alto nivel de coordinación durante 2001 y 2002 con la CTA y el Bloque Piquetero Nacional. La asunción de Kirchner, la creación del gabinete piquetero y la reorientación de la política social crearon un campo de acción bien diferente al que habían conocido en el momento de su emergencia. Lo cierto es que entre 2003 y 2006 el kirchnerismo se conformó en una posibilidad identificatoria, en el sentido que generó condiciones de posibilidad

para releer ciertas tradiciones políticas (Barros, 2010). Así, el peronismo dejó de ser solamente una memoria para volver a ser una forma de hacer política, propiciando que ciertas organizaciones repensaran su relación con el gobierno, empezaran a reconocerse kirchneristas y revisaran su estrategia de articulación política. De ahí que muchas de las organizaciones no sólo adoptaron otras identidades, con cambio de nombre incluido, sino que aceptaron incorporarse a la coalición de gobierno y apostar a la construcción territorial. En este contexto, se redefinió el mapa organizacional, entre las principales estaban la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita (MTD Evita), el Movimiento Barrios de Pie y el reciente Frente Transversal Nacional y Popular. Estas organizaciones, con mayor capacidad de movilización, iniciaron un proceso de coordinación que culminaría algunos años después con la conformación del Movimiento Evita (2005) y el Movimiento Libres del Sur (2006).

Luego de esta reorganización del campo multiorganizacional devino un momento de politización en un sentido estricto. Es decir, retomando lo que mencionamos en una sección anterior, las organizaciones habían logrado crear una base a la que representar y entablar con ellas un alto proceso de movilización y politización. Lo que restaba era poder apuntalar la participación en la coalición de gobierno tanto en las esferas del ejecutivo como del legislativo. En la misma tónica que las organizaciones sindicales promovieron la demanda del salto a la política, en el sentido de la reivindicación de sus capacidades para actuar en un campo político además del social/sectorial. Esta apuesta no siempre salió bien de acuerdo a los intereses de las organizaciones; de hecho, Libres del Sur abandonó el gobierno y el Frente para la Victoria a mediados de 2008 luego que Kirchner decidiera disputar la presidencia del Partido Justicialista y la FTV fue disolviéndose progresivamente.

Ciertos hechos coyunturales generaron otras condiciones de acción para las organizaciones. Uno de ellos ha sido la crisis internacional de 2008/2009 cuando aquellas empezaron a identificar algunos problemas estructurales para avanzar en las conquistas sociales. Algunas organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita y el Movimiento de

Trabajadores Excluidos (MTE), empezaron a delinear una estrategia orientada a la organización de los trabajadores no asalariados, integrantes de sus organizaciones y en muchos casos titulares de programas sociales, que se habían reorientado a un perfil de tipo más productivista. Si bien hasta ahora las organizaciones habían demostrado un alto nivel de actuación y movilización, lo cierto es que desde 2009 y 2010 iniciaron un proceso de organización de trabajadores no asalariados y, poco después, en 2011 fundaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en un claro intento de repensar las transformaciones de la clase trabajadora.

Desde ese momento, alternaron esa demanda de participación política con la consolidación de esa estrategia sectorial. Sin embargo, a diferencia de algunos sectores sindicales, nunca rompieron abiertamente con el kirchnerismo mientras ejerció el gobierno. Incluso fueron activos militantes de la campaña de 2015 a favor de Daniel Scioli y soñaban con la concreción de un Ministerio de Economía Popular en caso de su triunfo.

LA RELACIÓN ESTATAL Y EL DESEMPATE IMPOSIBLE

Ahora bien, este proceso que hemos descripto sucintamente en clave de dinámica socio-política omite dos aspectos que corresponde introducir. El primero se refiere a que la crisis de 2001 no sólo generó las condiciones para la emergencia del kirchnerismo, sino también para la formación de un espacio de centro-derecha y la revitalización de la gramática liberal (Natalucci, 2022). Esta última fue un efecto tardío de aquella crisis pero implicaba la reposición de los valores neoliberales respecto del Estado. En otras palabras, en el campo político no solo jugaba y/o participaba el kirchnerismo sino también otras fuerzas políticas antagónicas bien diferentes en términos ideológicos. Y esta cuestión se relaciona con el segundo aspecto que hay que incorporar en el análisis. Se trata de la disputa en torno al Estado: no todos querían que el Estado volviera, algunos querían que siguiera retirado para usar la misma metáfora.

Respecto de este punto, nos interesa traer a colación los aportes de Álvaro García Linera acerca de

su problematización sobre la relación Estatal. Para su análisis, propone tres ejes analíticos, a saber: “el Estado como correlación de fuerzas sociales, el Estado como institución y el Estado como idea o creencia colectiva generalizada” (2008, 392). En sus términos, el Estado constituye una relación, “una estructura de relaciones políticas territorializadas y, por lo tanto, son flujos de interrelaciones y de materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y la legitimación política” (2008, 392). De esta manera, el Estado implica la correlación de fuerzas entre bloques sociales en un sentido más estructural, que da lugar a ciertas dinámicas socio-políticas pero que las subyace. Atendiendo a este punto, no es posible afirmar taxativamente que la crisis abierta en 2001 está cerrada con la salida electoral de 2003, sino que desde entonces se abrió una disputa, con diferentes pliegues y aperturas según los hechos coyunturales. Con estas disputas de fondo, García Linera prevé la posibilidad de un empate catastrófico (2008, 394). Según lo planteado en trabajos previos, con las elecciones de 2015 -y esa mínima diferencia electoral de poco más de 80 mil votos- y la dinámica de la protesta entre 2016 y 2019 nos encontramos en un escenario de “desempate imposible” respecto del neoliberalismo (Natalucci y Fernández Mouján, 2022). En el marco de esta disputa la pregunta por el Estado sigue abierta.

Ahora bien ¿qué quiere decir “desempate imposible”? Evidentemente es un parafraseo de la idea propuesta por Juan Carlos Portantiero acerca del “empate hegemónico” en los 70, en la que dos fuerzas tenían la capacidad de vetarse entre sí, pero no lograban hegemonizar el campo político por un largo período de tiempo. Así, ninguna de las dos fuerzas lograba “presentar sus intereses como los intereses de toda la sociedad y formar un bloque histórico” (Natanson, 2017, 3). En algún sentido, también para esta coyuntura podríamos pensar bajo esa misma noción; sin embargo, nuestra impresión es que lo que está en juego en la actualidad no es solo como dirimir la orientación política del bloque histórico, sino sus propios fundamentos. De ahí que pensemos que para esta época es más apropiado hablar de “desempate imposible” en cuanto a las dificultades para instaurar un nuevo consenso en torno al neoliberalismo y, en especial, sobre el Estado, los derechos y los vínculos entre este y los ciudadanos. Como

mencionamos en la Introducción, hay una diferencia sustancial entre la tensión intrínseca entre el liberalismo político/liberalismo económico -y las discusiones que abría ese contexto- y la que se entabla en torno al neoliberalismo como la extensión de la mercantilización sobre todo el mundo de la vida, incluyendo al Estado como formación socio-histórica.

En relación con esta problematización, García Linera hace un aporte significativo respecto de lo que llama “crisis estatal” (2008, 394), dado que no se trata solo de la emergencia de disidencias dentro del bloque de poder dominante, sino que está en duda el plano simbólico, el imaginario colectivo de la sociedad sobre el cual se construye cualquier propuesta política. Incluso cuestionando algunos estándares de cualquier poliarquía como las elecciones libres, los derechos liberales de asociación y de libre expresión, el Estado de derecho, incluyendo la división de poderes. El incremento de la criminalización de la protesta, la persecución a dirigentes políticos, sociales y sindicales, el monopolio mediático y la judicialización de la política, conocida como lawfare, constituyen estrategias de fuerte disciplinamiento.

Probablemente la contemporaneidad de estos acontecimientos le doten de una magnitud mayor frente a otros eventos históricos, sin embargo parece que el neoliberalismo como dispositivo y como programa económico parece avanzar sobre los ideales, imaginarios y derechos consagrados como tales. Tal vez por estas dificultades no haya posibilidades de consolidación de una nueva forma Estatal duradera, con cierta estabilidad en el mediano plazo. Por el contrario, tanto el proyecto neodesarrollista con inclusión social como el neoliberal excluyente parecen no lograr hegemonizar el campo político y ganar en legitimidad social. Por el contrario, la dominación política es precaria. En términos del intelectual boliviano pareciera que no logra constituirse el “punto de bifurcación estatal a partir del cual ya es posible hablar de un proceso de estabilización y de auto reproducción de la correlación de fuerzas y de cierre de la crisis del Estado” (García Linera, 2008, 397. cursivas en el original).

Esta imposibilidad suele denominarse como la grieta y representa el mayor desafío de la socie-

dad actual, así como de la elite dirigente que pueda conducirla, incluyendo sindicalistas, referentes sociales, políticos, etc. Un corolario tiene que ver con la suspensión de debates internos al interior de cada proyecto, dado que la amenaza frente a la aparición de la otra fuerza, o la contribución a la mayor precariedad del proceso político suspende las diferencias internas, los debates y las tensiones propias de la acción política. Así los dirigentes eligen sectorizar aún más sus posiciones y estrategias para no debilitar aún más la coalición de gobierno. Esto suele tener un efecto adverso dado que se genera un proceso de ostracismo, en la jerga de las organizaciones: cerrar filas, que impide cualquier estrategia de construcción política abarcativa.

CERRANDO FILAS

Retomando la noción de la gramática movimientista, si el período 2016-2019 estuvo caracterizado por los procesos de resistencia a las políticas del gobierno de la Alianza Cambiemos, a partir del retorno de un gobierno peronista con el Frente de Todos a fines del 2019, la dinámica de la protesta y la movilización tomó otro cariz. A esto se suma que a inicios de 2020 se declaró la pandemia de COVID-19, que implicó no solamente la imposición de ciertas medidas de restricción a la circulación -a priori una reformulación en términos de las posibilidades de movilización callejera-, sino también una crisis social y económica devenida de este suceso, que se asentaba sobre la crisis económica heredada del gobierno de Cambiemos.

Según datos del Observatorio de Protesta Social durante la pandemia hubo un incremento de la conflictividad que se mantiene hasta la actualidad. A diferencia de otros períodos políticos (sean los gobiernos kirchneristas o de la coalición Cambiemos), la protesta desde ese entonces asumió un carácter peculiar: su segmentación. Hasta ahora los ciclos de movilización se habían caracterizado por momentos de mayor fragmentación o heterogeneidad. Por su parte, la protesta fragmentada alude a la “singularización de las demandas con alta localización, poca continuidad temporal [y con poca] fortaleza identitaria” (Schuster et al., 2006, 8). Por la otra, la heterogeneidad. Se caracteriza por la multiplicidad de actores, demandas y repertorios, por lo cual ninguna organización puede

ostentar el monopolio o patrimonio de la protesta como tampoco las conquistas que resulten de ella (Natalucci, 2019).

Contrariamente, en la protesta segmentada las organizaciones ya se encuentran consolidadas, con identidades definidas, y parecen decidir deliberadamente no establecer acciones de coordinación y de articulación con otras. Cada evento está situado en un espacio, localizado, sin intentos de generalización o nacionalización. Por estas características, las posibilidades de impacto institucional son bajas, dado que la apelación de los dirigentes se orienta a la resolución de las demandas de un modo más administrativo que político. La excepción son aquellas protestas que se orientan a disputar con la otra fuerza política en juego, por ejemplo en los casos donde se impugna los procesos de criminalización y persecución de los dirigentes o en defensa de la democracia. La protesta de tipo segmentada creció al ritmo de la pandemia toda vez que el espacio público, sobre todo el callejero, estaba clausurado. Así, cada organización optó por protestar por su lado, con sus demandas sectorializadas y con poca voluntad de articular con otros colectivos. Las organizaciones sindicales se enfocaron en demandas como las vinculadas a las condiciones de trabajo y garantía de pagos de salarios, mientras las organizaciones sociales y de base territorial reclamaban la implementación de políticas sociales sectoriales que morigeraran la crisis económica que se agravaba (Natalucci, et. al, 2020). Esta estrategia fue continuada una vez que la cuarentena se fue flexibilizando aunque por razones diferentes a las restricciones a la circulación.

Recapitulando brevemente, la CGT se reunificó en 2019 también con una conducción tripartita (Héctor Daer- Sanidad; Pablo Moyano, Camioneros y Carlos Acuña -estaciones de servicio), sin mostrar un posicionamiento estable. Aún con diferencias, los sindicatos cegestistas han tenido un desempeño más bien sectorial, y lo mismo puede decirse de la CTA-t. Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Economía Popular -conformada en diciembre de 2019- siguieron un poco esta dinámica: ocupación de lugares en la conducción del Estado, escaños legislativos y una protesta sectorializada, sobre todo con demandas por pedidos de asistencia so-

cial directa a partir de la crisis económica. Si bien la movilización no decayó en términos cuantitativos, adquirió este carácter segmentado y de baja incidencia sobre el sistema político.

REFLEXIONES FINALES

Empezamos este artículo con la pregunta por la desigualdad y la democracia que ha puesto en crisis a esta última tal como la conocimos en el último siglo. Asimismo, señalamos que una de las particularidades del caso argentino se relacionaba con los altos procesos de organización popular y con la politización de los sectores con representación social que abocaban por participar en la comunidad política. Incluso esta característica ha sido clave para instalar nuevos debates -por ejemplo el derecho a un ingreso universal o antes el seguro de desempleo-, las formas de intervenir -recuperando viejas tradiciones obreras como el piquete y la manifestación como forma transversal de estar en la calle- y de acción colectiva -en la reorganización de sectores que en el mundo no se han organizado, como los desocupados primero y los trabajadores no asalariados después-.

Esta insistencia de los procesos de organización ha sido clave para persistir en momentos de ofensiva de los sectores dominantes por incrementar aún más la distribución de la riqueza a su favor. Sin embargo, también parece encontrar algunos

límites, aún recientes pero que se empiezan a vislumbrar en los ciclos de movilización. Al respecto, mencionamos que durante mucho tiempo la movilización era considerada como una estrategia de cuestionamiento social en los momentos defensivos, y plebiscitaria y de apoyo a los gobiernos afines en los momentos ofensivos. No obstante esta memoria, lo cierto es la profundización de la crisis económica, sobre todo por la altísima inflación como mecanismo disciplinador de los sectores dominantes, la debilidad creciente del gobierno y el proceso de persecución política a Cristina Fernández de Kirchner -incluyendo el intento de su asesinato- han sido decisivos para que las organizaciones sociales y sindicales mantuvieran una estrategia descentralizada de protestar, sin intentar coordinar con otras y sin presionar en demasía. Esto es clave para entender por qué no ha habido paros generales en estos años o por qué se discontinuó la articulación entre los nucleamientos sindicales y de la economía popular. Y también lo es para entender por qué en ciertos contextos se suspende esa idea que la movilización es plebiscitaria cuando gobiernan coaliciones vinculadas al peronismo.

La tensión hoy se ubica no sólo entre dos fuerzas que pugnan por desempatar entre dos modelos diferentes de gobernar, sino también al interior de la coalición oficialista, en esa siempre compleja contradicción entre representación sectorial y política y de cómo se articulen las alianzas en su interior.

BIBLIOGRAFÍA

- Armellino Martín (2012). “Kind of Blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) durante los años kirchneristas”, Germán Pérez y Ana Natalucci (eds), *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*, Buenos Aires, Nueva Trilce Editorial, 101-126.
- Barros Sebastián (2010). “Identificación populista, espacio y democracia”, ponencia presentada en el II Encuentro entre Equipos de Investigación en Teoría Política, Córdoba, Argentina. 23 y 24 de Septiembre.
- Borón Atilio (2007). “Identidad, subjetividad y representación”, en Villanueva Ernesto y Massetti Astor (Comp). *Movimientos sociales en la Argentina de hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 26-40.
- Campione Daniel y Rajland Beatriz (2006). “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos”, en Caetano Gerardo (Comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 297-330.
- Castel Robert, Kessler Gabriel, Merklen Denis y Murad Numa (2013). *Individuación, Precariedad, Inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?* Buenos Aires: Paidós.
- Cohen Jean (1985), “Estrategia o identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos sociales contemporáneos”, en *Social Research Review*, Vol. 52, Nº 4, 3-42.
- Dahl Robert (1989), *La Poliarquía*, Madrid: Tecnos.
- De Lagasnerie Geoffry (2012). *La última lección de Michel Foucault: sobre el neoliberalismo, la teoría y la política*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- García Linera Alvaro (2008). *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Buenos Aires: CLACSO.
- Goldstone Jack (2004). More social movements or fewer? Beyond political opportunity structures to relational fields, *Theory and Society* 33, 333-365.
- Gómez Marcelo y Massetti Astor (2009). *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros sobre el proyecto nacional y latinoamericano*, Buenos Aires, Nueva Trilce.
- Gradin Agustín (2017). “¿Cuántas sillas se repartieron? El lugar otorgado a las organizaciones de la sociedad civil en la legislación nacional impulsada por los gobiernos kirchneristas (2003 -2015)”. Ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político, Buenos Aires, 5 al 7 de agosto de 2017.
- Gradin Agustina (2015). *La participación política de las organizaciones de desocupados en el Estado nacional durante el periodo 2003 – 2009. La experiencia del Movimiento Barrios de Pie: sus límites y potencialidades* (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
- Gurrera María Silvana (2008). “Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa”, Bettina Levy y Natalia Gianatelli (eds.), *La política en movimiento: identidades y experiencias de organización en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO.
- Longa Francisco (2019). *Historia del Movimiento Evita*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- McCarthy John y Zald Mayer (1977). “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”, en *American Journal of Sociology*, Vol 82, Issue 6, 1212-1241.
- McAdam Doug, Tarrow Sidney y Tilly Charles (2005). *Dinámica de la contienda política*, Barcelona: Hacer Editorial.
- Melucci Alberto (1994a) “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales”, en *Zona Abierta*, 69, Madrid, 153-178.
- Melucci Alberto (1994b). “¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?”, en Laraña E. y Gusfield, J. *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, 119-147.
- Morris María Belén (2020), “Los itinerarios de la Central de Trabajadores de la Argentina durante los gobiernos kirchneristas: ¿autónomos, independientes o neutrales?”, en *Revista Izquierdas*, 49, 3699-3740.
- Natalucci Ana (2019). Social Mobilization and Politics in Argentina: Peak and Crisis of the Left Turn. En J.P. Ferrero, A. Natalucci, L. Tatagiba (Ed.), *Socio-Political Dynamics within the Crisis of the Left: Argentina and Brazil*, London: Rowman and Littlefield, 65-94.
- Natalucci Ana (2018a). “El neoliberalismo en acto: políticas sociales y experiencias organizativas en Argentina (2009-

2016)", *Revista Polis*, 49, 103-125. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v17n49/0718-6568-polis-17-49-00103.pdf>.

Natalucci Ana (2018b). "La gramática movimentista durante el giro a la izquierda: El caso de Argentina", *Revista de Sociología* 33(1), 88-103. <https://doi.org/10.5354/0719-529X.2018.51796>.

Natalucci Ana (2017). "El sindicalismo peronista durante el kirchnerismo (2003-2015)", En Paula Abal Medina, Ana Natalucci y Fernando Rosso *¿Existe la clase obrera?*, Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, Buenos Aires, 63-124.

Natalucci Ana (2015). "Mobilização social e mudanças políticas: revisitando o conceito de gramáticas de ação política", *Plural - Revista De Ciências Sociais*, 22(1), 83-106. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-8099.pcs0.2015.102215>.

Natalucci Ana (2012). "Los movimentistas. Expectativas y desafíos del Movimiento Evita en el espacio kirchnerista (2003-2010)". En Germán Pérez y Ana Natalucci (Ed.) *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 27-56.

Natalucci Ana y Fernández Mouján Lucio (2022), "¿Un giro a la derecha? Movilización y política en la Argentina contemporánea (2015-2019)", *Revista Polis*, Vol. 21, Nº 61, 59-79, 2022. <https://doi.org/10.32735/S0718-6568>.

Natalucci Ana, Fernández Mouján Lucio, Mate Ernesto, Ríos Victoria, Stefanetti Camila y Vaccari Samantha (2020). *La protesta social en cuarentena. Base de datos en protestas sociales en Argentina 2020*, Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), CONICET-UMET. https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/2020_DOCUMENTO_Metodo-CITRA-volumen-6.pdf.

Natalucci Ana y Pagliarone Florencia (2013). "Revisitando los conceptos de lo social y lo político: movimientos sociales, procesos de democratización y nuevas institucionalidades", *Revista Andina de Estudios Políticos*, Vol. 3, Nº 2, 77-98. <http://revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/article/view/1626>.

Natanson José (2017). "Empate hegemónico en América Latina". <https://www.eldiplo.org/notas-web/empate-hegemonico-en-america-latina/>.

Pérez Germán (2010). "El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica", en Astor Massetti (Comp.) *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 439-445.

Pérez Germán (2011). Neoliberalismo y política. En Germán Pérez (Ed.) *Todo aquel fulgor. La política argentina después del neoliberalismo*, Buenos Aires: Nueva Trilce, 11-18.

Pérez Germán y Natalucci Ana (2012). *Vamos las bandas. Organizaciones y militancia kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

Pérez Germán y Natalucci Ana (2008). "Estudios sobre movilización y acción colectiva: interés, identidad y sujetos políticos en las nuevas formas de conflictividad social" en Ana Natalucci (Ed.) *Sujetos, movimientos y memorias. Sobre los relatos del pasado y los modos de confrontación contemporáneos*. La Plata: Al Margen, 81-102.

Rinesi Eduardo y Vommaro Gabriel (2007). "Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos" en Eduardo Rinesi (Compiladores) *Los lentes de Víctor Hugo*, Buenos Aires: Prometeo.

Schuttenberg Mauricio (2014). *Las identidades nacional-populares*, Villa María: Editorial Universitaria Villa María.

Schuster Federico, Pérez Germán, Pereyra Sebastián, Armesto Melchor, Armelino Martín, García Analía, Natalucci Ana, Vázquez Melina y Zipcioglu Patricia (2006). *Documento de Trabajo No 48 Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*. Instituto Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires. (FCS-UBA).

Sidicaro Ricardo (2011). El partido peronista y los gobiernos kirchneristas. *Nueva Sociedad*, Caracas, Nº 234, 75-94. <http://nuso.org/>.

Svampa Maristella (2005). *La sociedad excluyente*. Buenos Aires: Taurus.

Svampa Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): *Entre la ruta y el barrio*. Buenos Aires: Biblos.

Tapia Luis (2009). "Movimientos sociales, movimientos sociales y los no lugares de la política", en *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*, Buenos Aires: CLACSO.

Touraine Alan (2006). "Los movimientos sociales", *Revista Colombiana de Sociología*, Bogotá, Nº 27, 255-278.

Vilas Carlos (2011). *Después del neoliberalismo: Estado y procesos políticos en América Latina*, Lanús, UNLa.

Vommaro Gabriel (2017). *La larga marcha de Cambiemos*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Wainer Andrés (2016). "¿El populismo imposible? Economía y política en la Argentina reciente", en *Revista Épocas*, Nº 2, 3-14.